

1-\*

## COYUNTURA POLITICA 1979 1986

*Acción Histórica 1979-1986* PRIMERA PARTE

1979 es el año en que la confrontación entre el proyecto político oligárquico y el proyecto político popular alcanza su nivel más elevado, traduciendo en el enfrentamiento entre el estamento militar, depositario real del poder político, y la conformación de un frente político muy amplio que aglutina todas las fuerzas sociales representativas de los intereses populares con todos sus matices políticos e ideológicos, que van desde los grupos social cristianos hasta las organizaciones marxistas leninistas apoyadas en grupos de autodefensa con estrategia y experiencia militar acumulada desde 1970.

Después de ensayar el acceso al poder político de sectores representativos del Foro Popular y ante lo inaceptable de sus exigencias relativas a modificar esencialmente la estructura económica y política del país; esta confrontación se pretende resolver mediante dos vías, la vía tradicional de la represión indiscriminada; y un elemento relativamente novedoso, previamente ensayado en 1976; la vía reformista o dicho de otro modo, la implementación de un proyecto reformista a nivel económico y de contrainsurgencia a nivel político.

Las fuerzas sociales sustentantes de éste nuevo proyecto político serían:

- i) Los Estados Unidos, en defensa de su zona geopolítica de influencia
- ii) Un importante núcleo del estamento militar en defensa de su propio status.
- iii) Un núcleo modernizante del sector empresarial.
- iv) Y el partido demócrata-cristiano como representativo de los sectores medios de la población, aprovechando el arraigo popular obtenido en persistentes jornadas electorales como partido de oposición.

En 1980 se implementan las primeras medidas económicas reformistas que afectan, aunque en forma limitada, a los grupos terratenientes y favorecen a un buen número de campesinos pobres, colonos, arrendatarios, etc.

Las limitaciones estructurales de la Reforma Agraria residen en dos puntos básicos:

- 1) No afecta fundamentalmente la economía cafetalera, excepto en lo que se refiere al destino de las divisas obtenidas por las exportaciones del café.
- 2) No resuelve el grave problema de alrededor de medio millón de familias que no tienen acceso a la tierra.

En el mismo año la represión cobró niveles masivos y muy dramáticos, especialmente en el ataque a la movilización de unas 200,000 personas aglutinadas en la Coordinadora Revolucionaria de Masas, el 22 de enero; y el 24 de marzo del mismo año, con el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y posterior represión en la masiva concurrencia a los funerales.

El 10 de Enero de 1981, se registra la primera acción de gran envergadura por parte de las organizaciones revolucionarias, tipificada por ellas mismas como una "Ofensiva General" contra la dictadura militar y la Junta de Gobierno Demócrata-Cristiana pro-norteamericana.

A partir de entonces, es reconocida la beligerancia de las organizaciones revolucionarias y su proyecto económico-político que consiste en la implementación de un modelo de economía mixta de carácter popular y la instalación de un gobierno democrático-revolucionario.

Ante la necesidad de paliar la contradicción antagónica entre el gran capital y las fuerzas populares; con vistas al exterior, se nombra Presidente Provisional a Napoleón Duarte y se convoca a elecciones para Asamblea Constituyente en 1982. Mientras tanto en el interior del país se recrudece y sistematiza la represión institucional y paramilitar -- que para Julio de 1982 había alcanzado 15,000 víctimas, según fuentes humanitarias.

Las organizaciones populares y revolucionarias de hecho eran excluidas del sistema político y la actividad electoral fue reservada para los partidos políticos representativos del gran capital, y la democracia-cristiana representando a la burguesía modernizante y sectores medios acomodados.

Las elecciones de 1982, mostraron -- palpablemente, la capacidad de presión y manipuleo de las fuerzas derechistas; -- que solo mediante el Pacto de Apaneca, -- cedieron a la formación de un gobierno de Unidad Nacional, promovido por la Embajada Norteamericana y dirigido formalmente por Alvaro Magaña a propuesta del Estado Mayor de la Fuerza Armada.

La elaboración de la carta constitutiva fue otra batalla entre bastidores -- entre la derecha y el proyecto reformista de la democracia-cristiana patrocinado por Estados Unidos. Uno de los puntos más conflictivos fue el relativo a las reformas económicas, hasta que "acordaron", básicamente presionados por Estados Unidos, congelar la 2a. Etapa de la Reforma Agraria y la derogatoria del decreto 207 relativo a la ejecución de la 3a. Etapa de la misma.

El gobierno de Unidad Nacional se -- caracterizó por agudas luchas intestinas a nivel institucional y por su incapacidad para articular una política económica coherente. Aparte del componente represivo y la contratación creciente de ayuda económica y militar proveniente de Estados Unidos.

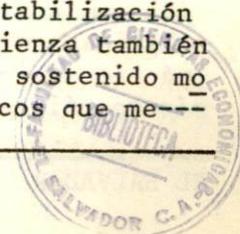
Por supuesto durante todo este período, las fuerzas insurgentes estuvieron presentes y aparte de su ascendente fuerza militar, aportaron un elemento -- nuevo en la coyuntura, como son sus reiteradas propuestas de diálogo con el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos, como fuerza involucrada directamente en el conflicto.

La presión internacional para una rápida solución política al conflicto interno y las evidencias de franca derechozación del proceso reformista iniciado en Octubre de 1979, fueron factores que estimularon la redefinición del poder político, por lo menos a nivel formal, para mejorar la imagen al exterior del gobierno salvadoreño y a nivel interno, la producción de un centro político que -- aglutinara nuevas fuerzas que rompieran el cerco político tendido por los partidos políticos derechistas. Las elecciones de 1984 tuvieron esos objetivos y la nominación de Duarte como Presidente de la República, ante la oposición obstinada de la derecha, acarrea inmediatamente créditos internacionales, especialmente, de la democracia-cristiana internacional y se logra suavizar la posición de la social democracia.

Arriban a la palestra política, nuevas fuerzas sociales, entre 1980 y 1986, algunas como la Unión Popular Democrática (UPD), integrada por organizaciones de líderes campesinos formados en Estados Unidos por la AFL-CIO; organizaciones gremiales y solidarias resultantes de la Reforma Agraria; organizaciones de empleados públicos especialmente del Ministerio de Obras Públicas y Agricultura; y otras organizaciones de indígenas, pequeños empresarios, etc., todas ellas como sustentantes del pacto social suscrito con la democracia-cristiana.

Simultáneamente se comienza a reactivar el movimiento sindical aún en contra de las continuas acusaciones de subvertir el orden y de estar aliados al -- FMLN.

Ante las medidas de estabilización económica del gobierno, comienza también a desarrollarse un amplio y sostenido movimiento de empleados públicos que me--



3

P.H.

diante acciones de "suspensión de labores" exigen aumentos salariales, especialmente entre los empleados del gobierno central e instituciones autónomas.

Las cooperativas agrarias tropiezan con innumerables problemas para sus asociados, entre ellos falta de asistencia técnica, comercialización inadecuada, falta de financiamiento e insumos, etc., tal que en poco tiempo se constituyen en poderosas federaciones que presionan al gobierno para que modifique su política económica pro-empresarial y la reoriente hacia el beneficio popular. En Marzo de 1984 se constituye COACES.

Si bien la movilización sindical, de gremios de empleados públicos y el movimiento cooperativo basa la generalidad de sus planteamientos en reivindicaciones de carácter económico; a nivel político, mantiene una posición en contra de la política económica gubernamental, la posición militarista del ejército y su negativa a una solución política, y el rechazo del diálogo por parte del gobierno.

A fines de 1984 se realizan dos rondas de diálogo entre las fuerzas insurgentes y el gobierno. Ambas sin la intención real de negociar, sino de ganar espacio político y delimitar claramente sus posiciones frente al conflicto. El gobierno, pretendiendo ganar la delantera a las fuerzas derechistas, preparar el terreno para las elecciones de Marzo de 1985 y retomar las propuestas de diálogo del FMLN que tan buena imagen le ha creado en el exterior. El FMLN aprovechando la oportunidad de constituirse en una fuerza beligerante, reconocida oficialmente por el gobierno y poder presentar, especialmente al pueblo salvadoreño, su propuesta global, ya no de un gobierno democrático revolucionario, sino de un gobierno de amplia participación.

Aunque el diálogo no fructificó en medidas concretas hacia la pacificación del país, las fuerzas sociales que recién comienzan a incorporarse a la vida política, se sienten estimuladas en su práctica reivindicativa y el reconocimiento oficial del diálogo, les ofrece

una gran cobertura para exigir una solución rápida al conflicto mediante el diálogo y la negociación.

Las elecciones para Alcaldes y Diputados en Marzo de 1985, produjo el resultado esperado. La Democracia-Cristiana logró ganar la mayoría de Alcaldes y Diputados, que le era imprescindible a fin de consolidar así su proyecto político, evidenciando, incluso, el respaldo de la alta jerarquía del ejército.

Esto le permitió a la Democracia-Cristiana comenzar a articular más claramente su política económica y su concepto filosófico de la sociedad Global, todo ello expresado en su plan general de gobierno: Un camino hacia la paz. El contenido básico es la propuesta de una economía social de mercado y la consolidación del proyecto reformista mediante el cual se conquiste progresivamente la humanización y pacificación del conflicto.

La dinámica propia del conflicto militar, la obsecada oposición del gran capital y las presiones de organismos financieros internacionales, obligaron a la Democracia Cristiana a iniciar un proceso de devaluación de la moneda nacional que culminó en el programa de estabilización económica decretado en enero de 1986, que está muy lejos de su retórica populista y que descarga el peso de la crisis económica y el financiamiento de la guerra en los sectores populares.

Las organizaciones populares gremiales y laborales que pacientemente habían venido ampliando y consolidando su estructura orgánica, aún en contra de la represión y de costosas campañas publicitarias, se aglutinan en la UNTS y comienzan a movilizarse en contra de lo que llaman el paquetazo económico, logrando estructurar una respuesta orgánica y política que no era posible desde enero de 1980. Lo más relevante de esta estructura unitaria laboral es el haber atraído hacia sus posiciones a la UPD, Unión Popular Democrática, la organización más representativa de la base social de la Democracia Cristiana y también a FENAPES,

Federación Nacional de la Pequeña Empresa Salvadoreña, tradicionalmente portadora de la posición de los grandes empresarios y/o el gobierno.

Los grupos empresariales también -- tratan de aglutinarse en la UPS, Unión Productiva Salvadoreña para presionar -- por la abolición de los gravámenes al comercio exterior, intento que hasta hoy -- no ha fructificado en acciones concretas.

Por su parte la Democracia-Cristiana en forma muy precipitada ha sido obligada a mostrar su base social y haciendo uso de los recursos institucionales ha creado la UNOC, Unión Nacional de Obreros y Campesinos, para oponerla explícitamente a los cafetaleros en su lucha -- por la recuperación del Comercio Exterior del Café (INCAFE) y a la UNTS, en su lucha contra el programa de estabilización económico. \*

Tratando de fijar algunas perspectivas para la presente coyuntura política, es posible identificar la redefinición de los distintos proyectos reseñados en éste breve sumario.

En lo que se refiere al proyecto reformista, la Democracia-Cristiana ha reiterado su llamado a los grupos empresariales y a los partidos políticos derechos a reagruparse en un proyecto de unidad nacional, sobre la base de que el enemigo común son las fuerzas insurgentes. En cierto modo esto coincide con la propuesta de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo Económico y Social de un Modelo de Fomento de Exportaciones no tradicionales como alternativa económica, -- ante la rigidez del modelo agroexportador tradicional; alternativa que ya ha sido aceptada y legitimada por el gobierno. Todo ello en el contexto de las iniciativas económicas y políticas tomadas por Estados Unidos y derivadas del informe Kissinger.

En cuanto a la guerra y ante la imposibilidad de resolver el empate militar entre las fuerzas insurgentes y el ejército salvadoreño; Estados Unidos ha optado por implementar una estrategia de guerra de baja intensidad, que en un período relativamente largo produzca el -- desgaste de las fuerzas insurgentes, la consolidación del proyecto reformista y el aislamiento del proyecto oligárquico tradicional.

A ésta perspectiva se opone el proyecto insurgente, que con su probada capacidad militar, ahora cuenta con el apoyo implícito de un movimiento reivindicativo en las ciudades y en el campo que tiende a expandirse y a convertirse en -- una fuerza social muy importante y capaz de presionar por la realización de un -- diálogo nacional, la realización de un plebiscito para decidir sobre la continuación de la guerra y luchar por la profundización del proceso reformista iniciado en 1980.

Lo agudo de la crisis económica y -- la elevada presión militar de las fuerzas insurgentes, ahora apoyada en una -- creciente movilización popular, hacen -- prácticamente inviable el proyecto reformista y obligan a una redefinición de la participación de las distintas fuerzas -- sociales a través del diálogo y la negociación. A su vez el diálogo y la negociación, tiene fuertes oponentes en los grupos ultraderechistas, la alta jerarquía del ejército y la administración -- Reagan.

Todo ello hace prever que el conflicto se prolongará por un período relativamente largo en el que el proyecto reformista perderá vigencia, e incluso las reformas decretadas en 1980 se desnaturarán mediante un proceso de reversión que ya se ha iniciado; la representación de la Democracia-Cristiana probablemente se conservará formalmente en el gobierno, pero sin capacidad de incidir en el comportamiento real de la crisis y de la -- guerra.

El proyecto reformista tenderá o está tendiendo a ser sustituido por un modelo de corte neoliberal en lo económico y presidido en lo político por un gobierno autoritario. La interrogante que puede plantearse es: si las fuerzas insurgentes y el movimiento popular, podrán -- articular una respuesta política suficiente, que obligue al ejército y a las fuerzas derechistas y reformistas a sentarse a la mesa de diálogo y negociar la formación de un gobierno de amplia participación, lo que abriría una perspectiva totalmente nueva para nuestro país. \*99